



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE POSADAS

CAMARA FEDERAL DE POSADAS - SECRETARIA CIVIL

192 /2025/CA BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ MUNICIPALIDAD DE APOSTOLES s/ACCION
MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

//sadas, abril 28 de 2025.-

Y VISTOS:

1) Que, en en fecha 13/2/2025 el juez a quo rechazó la medida cautelar solicitada por el Banco de la Nación Argentina (BNA) contra la Municipalidad de Apóstoles.

Que, para así decidir, al analizar la solicitud de la medida cautelar, recordó que su admisión no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido pero sí requiere que quien la solicita acredite prima facie la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora. Y, en este sentido, consideró que no se configuraban los presupuestos necesarios para conceder la medida solicitada.

Destacó el magistrado de grado que el BNA reconoció tener una sucursal en el Municipio de Apóstoles y haber tributado la Tasa de Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor hasta septiembre de 2024, según los recibos adjuntos, pero que la demanda para impugnar el tributo, se presentó recién el 3/2/2025.

Así, en cuanto a la composición del tributo, el juez señaló que el BNA no demostró un incremento en la alícuota aplicada por el Municipio que se mantuvo en el 2% desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024, en cambio, destaca que lo que varió fue la base imponible determinada a partir de la información proporcionada por el propio Banco en sus declaraciones juradas mensuales.

Indicó además que el BNA no acreditó que el Municipio haya considerado ingresos derivados de títulos públicos para liquidar la tasa ni que haya invadido las competencias exclusivas del BCRA, por lo tanto, concluyó que la calificación de la tasa como irracional no encontraba respaldo en las ordenanzas acompañadas.

En cuanto a la verosimilitud en el derecho, consideró además que la cuestión de fondo que involucra cuestionar la procedencia, alícuota y cuantía del tributo, requiere un análisis de la estructura tributaria del Código Fiscal Municipal y los servicios prestados por la Municipalidad, lo cual excede el marco de una medida cautelar.

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#39656042#453021554#20250428075202682

Respecto al peligro en la demora, sostuvo que el BNA no demostró que la tasa afectara directamente el desarrollo de sus actividades ni que le generara un perjuicio patrimonial concreto que justificara eximirlo de su pago, mencionando únicamente el cierre de otras sucursales atribuidas al cobro excesivo de tributos municipales.

Y, finalmente, resaltó que el BNA no ofreció contracautela, amparándose en su reconocida solvencia, lo que implicaba el reconocimiento de su suficiente capacidad económica.

2) Que, en fecha 18/2/2025 el BNA apela y en fecha 28/2/2025 expresó los respectivos agravios.

En el memorial agregado a fs. 127/148, los apoderados argumentan que esta resolución causa un perjuicio significativo a sus intereses y derechos y solicitan su revocatoria.

-A ese fin, sostienen ante esta Alzada que el juez a quo debió haber considerado el precedente judicial de este Tribunal en autos "*HSBC Bank Argentina S.A. c/ Municipalidad de Posadas*", donde se explicitó la contradicción de una norma municipal con la política monetaria del Estado Nacional respecto a la exención de impuestos sobre los ingresos derivados de títulos públicos, argumentado que la Municipalidad de Apóstoles está incluyendo en su base imponible para liquidar la tasa municipal, los ingresos provenientes de la tenencia de títulos públicos, lo cual va en contra de lo resuelto en el precedente citado y de las atribuciones del gobierno nacional.

-Se agravia también del aumento de la tasa municipal, la cual considera onerosa debido a la tenencia de títulos públicos y otros instrumentos de deuda pública nacional por parte del BNA y, alega al respecto que la liquidación de la base imponible definida por la Municipalidad toma en cuenta el total mensual de ingresos, incluyendo los generados por esos títulos públicos y que el municipio está afectando materia imponible coparticipada, contrariando el artículo 9º, inciso b) de la Ley de Coparticipación al asimilar la Tasa de Derecho de Inscripción, Registro y Servicios de Contralor a los ingresos brutos, lo que contraviene la Ley 23.548.

Establecida esta cuestión, considera que el juez no podría sugerir objetivamente que no se acreditó *prima facie* la verosimilitud del derecho invocado y el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE POSADAS

peligro irreparable en la demora, cuando esta cuestión ya fue materia de una decisión del propio tribunal al declarar la inaplicabilidad de la tasa sobre los ingresos derivados de títulos públicos y otros instrumentos de deuda pública nacional.

Que, insiste en que su parte demostró la concurrencia de los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la cautelar, señalando que, además de la pretensión fiscal municipal de gravar los instrumentos de la deuda pública nacional, no se observa ninguna contraprestación concreta, individualizada y efectiva por parte de la Municipalidad que justifique el cobro de la tasa.

Esgrime, por otro lado, que el juez de grado no tuvo en cuenta la confiscatoriedad del tributo, y alega que el peligro en la demora se configura por la potestad del municipio de ejecutar las sumas reclamadas, lo que generaría un perjuicio evidente dada la magnitud de los montos cuestionados.

Continúa en su libelo recursivo exponiendo que la Municipalidad ha convertido la tasa DIRYSC en un impuesto sobre las actividades lucrativas similar al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y finalmente, menciona el peligro en la demora ante la posibilidad de cierre de sucursales en la provincia debido a la exigibilidad de la tasa DIRYSC citando noticias sobre el cierre de una sucursal en La Matanza por este motivo. En forma subsidiaria propone una reducción del cincuenta por ciento (50%) en el pago de la tasa hasta que se dicte sentencia firme y solicita que se disponga como medida cautelar la exclusión provisional de los títulos públicos nacionales de la base imponible utilizada para la liquidación de la tasa.

3) Así las cosas, se procederá a resolver.

Que, en fecha 11/04/2025 esta Cámara resolvió cuestión análoga en autos FPO 5075/2024/CA BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ MUNICIPALIDAD DE POSADAS s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", donde dijimos -en cuanto al tema debatido-, que la C.S.J.N. ha dicho que *"... al evaluar la verosimilitud en el derecho de la pretensión cautelar y ponderar el principio de igualdad y capacidad contributiva, no deben descartarse los fines extrafiscales que en la creación de hechos imponibles y la cuantificación de los tributos puede haber tenido el legislador, cuestiones propias del diseño de una política fiscal ajena a la intervención del Poder Judicial, salvo en caso de discriminación o distingo arbitrario o injusto"* (arg. doct. Fallos: 289:508; 300:1027; 307:993), lo que mutatis mutandi resulta de aplicación al presente y, eventualmente de existir injusto, ello se analizará al momento del dictado de la sentencia definitiva, por lo

Fecha de firma: 29/04/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#39656042#453021554#20250428075202682

que las cuestiones introducidas en el memorial de agravios, exceden el acotado margen de análisis que exige la cautela interpuesta y refieren a cuestiones que merecerán atención al resolverse la cuestión de fondo.

Que, de igual manera, el requisito del peligro en la demora, atento a que apelante no aporta pruebas concretas que demuestren el impacto financiero del tributo y cómo podría llevar al cierre de las sucursales, haciendo irreparable el perjuicio invocado, en consecuencia, no se evidencia con claridad un perjuicio grave e irreparable para una entidad bancaria con solvencia económica.

Por ende, al no rebatirse adecuadamente conforme a prueba concluyente que hubiera aportado en la instancia anterior y lo decidido por el a quo, acerca de la evidencia de la confiscatoriedad alegada que produciría el cierre de las sucursales, este agravio resulta inatendible.

4) Conforme a todo lo expuesto, no se advierten configurados en autos los requisitos exigibles para la procedencia de la medida cautelar pretendida resultando ello suficiente para rechazar el recurso deducido y confirmar la resolución en crisis, desestimando la cautelar requerida por el peticionante. Ello, claro está sin perjuicio de lo que, en definitiva, se resuelva en el principal.

Que, tal solución se impone por cuanto ambos recaudos (verosimilitud en el derecho y peligro en la demora) deben encontrarse acreditados a los efectos del otorgamiento de la tutela requerida y teniendo en cuenta que -por ser provisional- no conlleva a una situación cuyos efectos no puedan ser revertidos en ulteriores resoluciones, sino que más bien importa hacer mérito a la prudencia.

Por todo ello, confírmase la resolución recurrida en lo que fuera materia de agravios, lo que así se decide.-

Notifíquese. Publíquese en la forma dispuesta en la Acordada 15/2013 de la CSJN. Devuélvase.-

